

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

**Medellín, veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)**

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, vencido el término de traslado establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la decisión correspondiente en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por RICARDO ANTONIO CASTAÑEDA MARULANDA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (**Radicado 05001-31-05-014-2019-00004-01**).

### ANTECEDENTES

El demandante pretende la reliquidación de su pensión de vejez con base a la máxima tasa de reemplazo que permite el Decreto 758 de 1990 aplicable por transición, así como el reconocimiento de la mesada 14, el retroactivo pensional derivado del otorgamiento pensional, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación y las costas del proceso.

Esos pedimentos los fundamentó así: Nació el 31 de agosto de 1951, contando en la actualidad con 67 años. Laboró como empleado privado hasta el 11 de abril de 2003, siendo su último empleador la Fundación Codesarrollo. Por medio de la Resolución N° 101676 del 15 de marzo de 2012, el ISS le reconoció una pensión de vejez bajo el régimen de transición en la suma de \$653.862, siendo incluido en la nómina de marzo de 2012 sin reconocimiento

del retroactivo. Presentó recurso de reposición y apelación solicitando la mesada 14 desde el 15 de marzo de 2012, el retroactivo y los intereses de mora, recibiendo una respuesta de trámite el 19 de junio de 2018.

COLPENSIONES en su respuesta al libelo afirmó no constarle los supuestos fácticos de la demanda, advirtiendo la improcedencia de reconocer la mesada 14 en virtud de no cumplir las exigencias del Acto Legislativo 01 de 2005, y recalcando no existir derecho a la reliquidación y el retroactivo por haberse tenido en cuenta en la liquidación cada una de las semanas cotizadas con aplicación de las normas más favorables. Como excepciones de mérito propuso las de inexistencia de la obligación de reconocer la mesada 14 al demandante, inexistencia de la obligación de reajustar la pensión de vejez y su retroactivo, ausencia de causa para pedir o petición en abstracto, improcedencia de la obligación de pagar intereses moratorios, buena fe de Colpensiones, prescripción, compensación, inexistencia de la obligación de pagar indexación de las condenas e imposibilidad de condena en costas.

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín mediante providencia del 13 de octubre de 2021, ABSOLVIÓ a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra. DECLARÓ probadas las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer la mesada 14 al demandante, inexistencia de la obligación de reajustar la pensión de vejez y su retroactivo, improcedencia de la obligación de pagar intereses moratorios, prescripción e inexistencia de la obligación de pagar indexación de las condenas. CONDENÓ en costas al demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$200.000.

La activa se apartó de lo decidido, argumentando que frente a la mesada 14 ha sido claro que el Acto Legislativo 01 de 2005 es un tema meramente político que afecta el principio de favorabilidad y los derechos adquiridos al estar ante un caso con beneficio del régimen de transición y 1.544 semanas cotizadas, considerando injusto que sea eliminado este derecho por una diferencia de 29 días, existiendo salvamentos de voto en las providencias de la Corte aduciendo tal situación. Indica que los intereses moratorios proceden por cuanto el ISS se tardó más del tiempo legal otorgado para resolver la prestación, y *“la base de liquidación sobre el IBL con respecto a la tasa de reemplazo, habría una*

*diferencia de 8 meses con respecto al pago que no cuadra con el valor que le otorgaron en el momento de la concesión".* Sobre las costas adujo que no deben imponerse porque había una situación por definir y con ello se afecta el mínimo vital del actor siendo esa condena contraproducente con sus necesidades básicas.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

Estando por fuera de discusión el reconocimiento de la pensión de vejez al demandante en aplicación de lo que regula el Decreto 758 de 1990 aplicable por la transición regulada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que se hizo por medio de la Resolución N° 101676 del 15 de marzo de 2012 a partir del 31 de agosto de 2011 en cuantía mensual de \$630.350, con base a un IBL de \$700.389 y una tasa de reemplazo del 90% (Págs. 8-9 Archivo 04), la Sala plantea como problema jurídico a resolver a partir de lo decidido en primera instancia y los argumentos de la alzada, si hay lugar a disponer el reconocimiento de la mesada 14, si deben otorgarse valores por reajustes y los intereses moratorios, definiendo la procedencia de imponer costas a cargo del demandante.

Pues bien, lo primero por decir es que la tesis propuesta por el recurrente en aras de inaplicar el Acto Legislativo 01 de 2005 por virtud del principio de favorabilidad, carece de prosperidad, evento que ya ha sido analizado por la Sala de Casación Laboral en numerosas sentencias y que constituyen una línea de pensamiento pacífica al interior de la Corporación.

Lo pregonado al respecto, se sintetiza en que la reforma constitucional no es regresiva y en consecuencia, no resulta inaplicable, dado que se trata de una norma reformativa de la Constitución que adquiere el consecuente status de disposición supra legal, cuyo control de constitucionalidad a la luz del artículo 241 compete únicamente a la Corte Constitucional. Además, ese control se

limita a vicios en el procedimiento, materiales o de fondo que solo se pueden evaluar en la medida que la disposición sustituya al texto de la Carta Superior.

A más de lo anterior, aun cuando el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia del régimen de transición y el número de mesadas pensionales a percibir anualmente, no tuvo efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas conforme a leyes anteriores; por el contrario, previó su salvaguarda y señaló el término máximo para la aplicación de regímenes anteriores, por lo que la existencia del derecho y su exigibilidad no dependen del aliento jurídico de la norma que lo creó, pues lo que interesa es que se haya causado o consolidado, esto es, entrado al patrimonio del titular, mientras esa norma rigió, significando lo anterior acorde al contenido del inciso 8° en coherencia con el parágrafo transitorio 6° de esa reforma constitucional, que quienes no causaran el derecho pensional previo a su vigencia, no podrían recibir más de 13 mesadas pensionales al año, a menos que el valor de la prestación no superara los 3 salarios mínimos mensuales y se causara previo al 31 de julio de 2011 quienes si recibirían 14 mesadas, derechos que bajo esos requerimientos, si se constituyen en adquiridos, entendidos estos como aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, por lo que al abrigo de acuerdos jurídicos vigentes cuando entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, permanecen indemnes y, por tanto, no pueden ser negados o transgredidos (Ver SL1347 de 2019, SL2864-2021 y SL2763-2022).

En atención a lo anterior, es claro que el derecho a la mesada 14 que se persigue no puede ser considerado como un derecho adquirido si no se causó dentro del límite temporal definido en la reforma que adicionó el artículo 48 de la Carta Superior, fundiéndose en solo una expectativa o, una probabilidad con la que eventualmente cuentan algunos afiliados de acuerdo a sus condiciones, para que puedan acceder a ella.

En ese contexto, surge clara la imposibilidad de inaplicar la norma que se recusa. Primero, porque se carece de competencia para resolver conflictos de constitucionalidad de una norma supralegal y, segundo, porque la corporación judicial competente para ello definió que el Acto Legislativo 01 de 2005 no

sustituyó el texto de la Constitución Política, por lo que siendo indiscutido que el actor materializó la edad pensional, esto es, los 60 años, el 31 de agosto de 2011, o sea, por fuera del plazo máximo otorgado por dicho cambio constitucional, se deriva el incumplimiento de los requisitos exigidos para conservar el beneficio de la mesada 14 suplicada, debiendo en este aspecto confirmarse la decisión.

Ahora, aunque resulta para esta Sala de decisión un tanto confuso el aparte de los argumentos del recurso que se reprodujo de forma literal, habrá de resolverse a partir de la sugerencia que se plasma desde la demanda que resalta que la mesada inicial deber ser mayor a la reconocida por la pasiva, porque se considera que la tasa de reemplazo a tener en cuenta es superior, además que no fue reconocido el retroactivo pensional al que había lugar.

Al respecto y sobre el reajuste pretendido basta señalar que el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, y que el extinto ISS en su oportunidad aplicó para proceder con el estudio y reconocimiento de la pensión de vejez del demandante, dispone el 90% como tasa de reemplazo para aquellas personas que hayan alcanzado más de 1.250 semanas en toda su vida laboral, por lo que contando el actor con 1.544 semanas aceptadas sin discusión en este escenario por la pasiva, es ese el porcentaje a aplicar sobre el IBL reconocido que no se atacó por el interesado, encontrando de ese modo ajustado el otorgamiento pensional de parte de la entidad de seguridad social.

Sobre el retroactivo pensional, se tiene que el derecho se engendró a partir de cuando el actor arribó a los 60 años, lo que ocurrió el 31 de agosto de 2011 (Pág.7 Archivo 04) , data que coincidió con la fecha de disfrute, encontrando del contenido del acto administrativo de reconocimiento, la liquidación de las mesadas causadas desde esa fecha y hasta el 28 de febrero de 2012 puesto que la inclusión en nómina se dio para marzo de esa anualidad, que fue equivalente a la suma total de \$4.459.474 que comprendió la mesada adicional de diciembre del año 2011, no existiendo saldos insolutos de mesadas por cubrir de parte de la Administradora.

Sobre los intereses de mora deprecados, debe partirse del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales o el no pago de mesadas dentro del plazo previsto en la ley para el otorgamiento de la pensión, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago, gravamen que es de naturaleza resarcitoria y que se estableció por la H. Corte Suprema de Justicia como procedentes para pensiones reconocidas bajo el régimen de transición (Ver SL1681-2020 y SL3130-2020).

Tratándose de pensiones de vejez, tiene estipulado el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 el tiempo de 4 meses para el reconocimiento de la prestación, contados desde el momento de la radicación de la solicitud, por lo que una vez transcurrido ese lapso, surge el derecho para el pensionado y el deber para la Administradora de los intereses moratorios que en este caso tienen asidero sobre los estipendios ya reconocidos, toda vez que la reclamación prestacional se dio el 21 de septiembre de 2011, lo que quiere decir que la entidad contaba hasta el 21 de enero de 2012 para definir lo pedido, y ello ocurrió el 15 de marzo de 2012 cuando fue emitida la resolución, disponiendo la inclusión en nómina en marzo de ese año con pago al mes siguiente, circunstancia que permite aseverar que a cargo de la demandada estaban los intereses de mora causados a partir del 22 de enero de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2012.

No obstante lo anterior, asiste razón al A quo cuando adujo la extinción de este derecho por configurarse el fenómeno de la prescripción, y así se dice, puesto que la exigibilidad del derecho se dio como se dijo desde el 21 de enero de 2012, y la resolución de reconocimiento de la pensión fue notificada el 03 de abril de 2012 (pág. 9 Archivo 04), por lo que contaba el actor para efectuar la reclamación de la mora hasta el 03 de abril de 2015 y ello ocurrió solo hasta el 19 de junio de 2018 (págs.13-16) dejando la parte transcurrir el término trienal estipulado en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS que da lugar a la prescripción de este rubro.

Debe precisarse que si bien en el documento que reposa en la página 13 del expediente digital se visualiza otra reclamación donde se envuelve también la petición de intereses de mora, mismo que estaba dirigido y lo recibe el ISS, el sello que contiene la fecha de presentación deja ver el mes de abril pero en lo demás es ilegible por encontrarse cortado sin posibilidad de atribuirse ello a la digitalización por poder verificarse el número de folio escrito plasmado en la parte superior, no ofreciendo el recurrente argumento alguno al respecto para promover la interrupción de este fenómeno en fecha distinta, además de partirse del hecho de la extinción de la entidad desde el 28 de septiembre de 2012, por lo que ha de entenderse que la radicación se dio en abril de ese año, situación que no modifica lo concluido, ya que la interrupción se da por una sola vez y el término de 3 años vencía en abril de 2015, instaurándose la demanda el 19 de diciembre de 2018, con lo que se da razón a la decisión de instancia en cuanto a la prescripción de este gravamen, que impide fulminar condena en este sentido.

En lo que atañe a las costas procesales impuestas al actor, debe señalarse que tal rubro es procedente en la forma ordenada, en tanto se trata de una imposición bajo criterios objetivos a cargo de quien fue vencido en juicio conforme lo pregonan el numeral 1° del artículo 365 del CGP, ya que tales rubros no supeditan su reconocimiento a una actuación subjetiva, sino exclusivamente a los resultados del proceso, siendo una consecuencia procesal del ejercicio de acción, y claramente frente a la demandada al señor Castañeda Marulanda le fue resuelta la Litis desfavorablemente (Ver SL947-2021 y AL471-2018). Y es que la finalidad de las costas procesales es cubrir las erogaciones económicas que comportan la atención de un proceso judicial, por lo que los gastos del polo pasivo dentro de este trámite deben ser asumidos por el extremo activo sin miras a sus condiciones económicas que por cierto no fueron debidamente acreditadas, lo que no se extrae del solo hecho de percibir una mesada pensional que es equivalente al salario mínimo.

De esa manera las cosas, atendiendo las condiciones antedichas, la sentencia revisada en apelación habrá de ser confirmada.


Las costas en esta instancia acorde a lo reglamentado por el artículo 365-3 del CGP son a cargo del actor, por lo que se fijarán las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha y procedencia conocidas. Las costas estarán a cargo del actor, se fijan las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310501420190000401  
**Proceso:** Ordinario  
**Demandante:** RICARDO ANTONIO CASTAÑEDA MARULANDA  
**Demandado:** COLPENSIONES  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 21/10/2022  
**Decisión:** CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 24/10/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario